SINDESENA
Junta Nacional

INFORME DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE SINDESENA

Santa Marta, 15 al 19 de febrero de 2016

Compañeros de Junta Nacional, presidente, fiscales y delegados de las subdirectivas de SINDESENA asistentes, compañeros todos, reciban fraternal saludo:

Adelantar un análisis sobre la compleja realidad política desde todas sus aristas, en un momento tan complejo como el que vive tanto nuestro entorno inmediato, como varias otras latitudes, y que todos ellos resulten sugerentes a nuestra Asamblea, resulta no solo exigente sino pretencioso, dados los innumerables asuntos que atraviesan esta realidad. Por ello, al tratar de expresar una visión general, que seguramente estará matizada de posturas subjetivas, sin que por ello opaque mi mejor esfuerzo por entregar elementos que contribuyan al sano debate, en un período que reclama replanteamientos y revisiones tácticas, me aplicaré sólo a algunos aspectos del contexto. Espero contribuyan al surgimiento de aportes colectivos valiosos y a las mejores decisiones propias de nuestro accionar como organización. Ojalá resulten en renovadas propuestas, inquietudes y lecturas de los eventos sociales, políticos y económicos, que preparen los amaneceres de esta lucha sindical, congruentes con el compromiso histórico que hemos asumido cuando decidimos aceptar el reto de ser dirigentes en una organización que, con seguridad lo digo, ha sabido enfrentar los embates de la adversidad, por más de cuarenta y cuatro años de lucha.

Sin buscar agotar a profundidad de esos tópicos, me ha parecido útil desarrollar este informe con base en los siguientes aspectos que pueden ser relevantes en el mundo de hoy, para comprender la situación nacional y nuestros escenarios sindicales:

- **VIOLENCIA GENERALIZADA:**

Un informe de la universidad de Barcelona a inicios de 2015, a través de la Escuela para el estudio de conflictos armados en el mundo, presenta un análisis sobre las principales tendencias en materia de conflictividad armada y construcción de paz a nivel global (y regional de su zona euro), a partir de cuatro ejes temáticos: conflictos armados, tensiones, procesos de paz y dimensión de género en la construcción de paz. Este informe identifica oportunidades para la reducción, prevención o resolución de conflictos, y señala elementos de riesgo y alerta preventiva. Resulta importante conocer algo de este asunto tan cercano a nosotros, pues en dicho informe se recalca la relevancia de cómo desde 2014 e inicios de 2015 se registraron **36 conflictos armados en todo el mundo** la mayoría concentrados en África (13 casos) y Asia (12). El resto de casos se contabilizaron en Oriente Medio (seis), Europa (cuatro) y América (uno). Durante el año se contabilizaron cuatro nuevos casos: RDC (este-ADF), China (Turquestán Oriental), Ucrania y Egipto (Sinaí). Al finalizar 2014 continuaban activos 34 de los 36 conflictos armados, debido al descenso en los niveles de violencia y confrontación en dos contextos: India

(Manipur) y Rusia (Kabardino Balkaria). Uno de los rasgos más llamativos en 2014 fue el gran número de contextos que evolucionaron negativamente durante el año. **Más de la mitad de los conflictos armados (55%) registraron un deterioro y una intensificación en los niveles de violencia.** Esta tendencia general de aumento en los niveles de conflictividad también se vio reflejada en el incremento en el número de casos de alta intensidad respecto a años anteriores. Se elevó el nivel de violencia en estos conflictos a la vez que profundizaron su impacto en la población civil con un elevado número de víctimas mortales; masacres y ejecuciones sumarias; ataques indiscriminados en zonas residenciales, campos de refugiados, colegios, hospitales y otras graves consecuencias en las ciudades; detenciones arbitrarias; torturas y otros múltiples abusos físicos y psicológicos; violencia sexual; reclutamientos de menores de edad; así como masivos desplazamientos forzados de población. Un dato estremecedor es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se superaba la cifra global de 50 millones de personas desplazadas a causa de conflictos, persecuciones, violaciones de los derechos humanos y contextos de violencia generalizada. La organización alertó que en los últimos años las múltiples crisis de refugio a nivel mundial habían alcanzado niveles no vistos desde el genocidio de Rwanda en 1994.

A escala global, 65 países sufrieron graves desigualdades de género, la mayoría concentrados en África y Asia. El 61% de los conflictos armados para los que existían datos sobre equidad de género tuvieron lugar en contextos con graves desigualdades; y este es un aspecto que sirve para comprender en un contexto propio como el nuestro, el sentido del accionar como organización sindical que busca igualdad en oportunidades para las muchachas y muchachos de nuestro país a través de la formación profesional integral, pues durante 2014 solamente, se constató la utilización de la violencia sexual y de género en especial contra la población joven, principalmente contra las mujeres, en escenarios de conflicto en todo el mundo. A pesar de que este tema se ha tratado en algunas cumbres mundiales, como la realizada en Londres en 2014, no se consiguieron compromisos políticos contundentes en esta materia.

El informe sitúa la cuestión de violencia en el centro del debate de la comunidad internacional; la renovada apuesta por el diálogo en el marco de la negociación sobre el programa atómico de Irán, por ejemplo; la esperanza que genera el diálogo nacional sudanés ante la situación que atraviesa el país en los últimos años, así como la fragilidad institucional, disputas regionales y violencia creciente; la situación entre Iraq y Siria, los riesgos para la seguridad humana y su impacto en el escenario regional; la escalada urbana que afecta a varias importantes urbes en todos los continentes y las pocas medidas consensuadas que se han tomado sobre este tema, marcan una gran preocupación global.

En Colombia la población civil sigue sufriendo graves abusos cometidos por grupos al margen de la ley. Los últimos surgieron luego de un proceso oficial de “desmovilización paramilitar” llevado a cabo hace una década. La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos, y cada año más de 200.000 personas abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común que sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros

activistas comunitarios sigamos enfrentando amenazas de muerte y actos de violencia. Para el caso concreto de sindicalistas y periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ONG colombiana que monitorea la situación de la libertad de prensa, informó que 2 periodistas fueron asesinados y 75 recibieron amenazas en 2013, y 58 recibieron amenazas entre enero y septiembre de 2014, mientras que La Escuela Nacional Sindical (ENS), por ejemplo, continúa denunciando asesinatos de sindicalistas. Hasta septiembre de 2014, la subunidad de la Fiscalía dedicada exclusivamente a la violencia contra sindicalistas había iniciado investigaciones en más de 110 casos de asesinatos de sindicalistas cometidos desde 2009, pero a la fecha solo se ha conseguido condenas en apenas 9 casos.

Esta situación nos lleva a enfocar la atención en el gobierno actual, más sofisticado en las formas que sus antecesores inmediatos, y que hace mayores manifestaciones de condena de esos ataques, pero que no obra investigaciones efectivas, mientras los responsables son rara vez arrestados y los derechos no pueden ser por tanto plenamente ejercidos por los grupos de población referidos. Pero lo que es más grave, el gobierno adelanta por su iniciativa proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetradas por organizaciones al margen de la ley o militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como “falsos positivos”.

- **CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA:**

A finales del año anterior y comienzos de éste, tal vez hemos escuchado, aunque no por muchos medios de comunicación, la alarmante desigualdad en cuanto a la posesión de las riquezas por los habitantes de este planeta. A comienzos de 2015, la organización internacional Oxfam advertía que este 2016 la riqueza del 1% más rico de la población del planeta superará a la del 99% restante a menos que se revierta la actual tendencia de desigualdad y concentración de riqueza, afirmación que se trató de paliar en el Foro mundial de Davos - Suiza, sin mayor éxito. La directora de esta organización Winnie Byanyima, advirtió durante el foro que el aumento descontrolado de la desigualdad está llevando al fracaso la lucha contra la pobreza a nivel mundial. A día de hoy, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes para comer y más de mil millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día**.** La investigación que muestra esta organización deja ver cómo la riqueza acumulada por el 1% más rico de la población se ha incrementado, pasando de un 44% en 2009 a un 48% en 2014. A este ritmo, para este 2016 habrá alcanzado el 50%. En 2014, los selectos miembros de esta élite del 1% mundial tenían de media una riqueza de 2,7 millones de dólares por adulto. Del 52% restante de la riqueza mundial, la mayor parte (el 46%) está en manos del 20% más rico. El 80% restante de la población comparte tan solo el 5,5% de la riqueza mundial: 3,851 dólares de media por adulto, lo que equivale a 1/700 parte de la riqueza media del 1% más rico de la población mundial. En términos netos, la fortuna de las 80 personas más ricas se ha duplicado entre 2009 y 2014.

Frente a este panorama, la investigación trae un dato que nos aterriza en algo que quienes hemos analizado medianamente la composición de las élites colombianas sabemos***: la riqueza extrema se transmite de generación en generación*** y cómo las élites dedican enormes recursos y esfuerzos a que los estándares globales se diseñen a su favor. Más de un tercio de los 1.645 milmillonarios incluidos en la lista Forbes heredaron gran parte o toda su fortuna. Este análisis igualmente nos

confirma la existencia no sólo de clases, sino de élites empeñadas en defender el estatus quo; nos recuerda que la lucha de clases es un hecho objetivo, aunque las formas de asumirla no son estáticas sino dinámicas y dialécticas, y nos propone un análisis que también debería orientar nuestro comportamiento en las decisiones políticas que como ciudadanos medianamente informados debemos tomar.

En diciembre de 2014, al intervenir en un conversatorio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Santos afirmó que el 1 % de la población más rica del país concentra el 20 por ciento del ingreso. Dijo que según un estudio del año 2011, el 1 % de la población colombiana concentra el 40 % de la riqueza total del país, por lo que hay mucho camino por recorrer para superar la desigualdad y que se abriría la información fiscal para sincerar las cifras y tener un punto de partida y saber si las políticas que estamos poniendo en marcha funcionan o no funcionan. Por eso, recalcó entonces, era tan importante conocer no solamente la concentración del ingreso, sino la concentración de la riqueza. Sin embargo, la realidad es que a medición tradicional de desigualdad es el Coeficiente de Gini, en el que 0 es la perfecta igualdad y 1 es desigualdad total, en este Colombia se mantiene en 0,5, convirtiéndose en el tercer país de la región, después de Haití y Brasil, con los peores resultados. Sin embargo, hay otros cálculos que muestran mejor la desigualdad. Es el caso de índice Palma (Medida reciente utilizada por investigadores del Kings College London.), que para Colombia se ubica en 4%.; esto quiere decir que 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que 40% más pobre. En comparación con la región, solo es superado por Honduras y Bolivia. Estos niveles muestran el fracaso de políticas gubernamentales que buscan disminuir tal desigualdad, período tras período, pues antes de la década de los 70 se vieron importantes disminuciones y luego en los 80's se disparó la cifra, la cual aún hoy se mantiene, con tendencia a profundizarse.

- **DETERIORO DE LOS SERVICIOS**

El deterioro en servicios básicos fundamentales como la sanidad, resultado de las políticas privatizadoras y los recortes en el presupuesto público de los últimos años, no solo está deteriorando la calidad de vida de gran parte de la población a nivel global y nacional sino que también está costando vidas.

En América latina las condiciones y posibilidades de acceso a los servicio públicos se ven cada vez más precarizadas dada la casi desaparición de estos servicio hoy en manos de privados, donde es casi imposible acceder a éstos en condiciones de optimidad, de hecho el continente nuestro está calificado como subóptimo en términos de acceso a los mismos. Según estudio de la universidad de vanderbilt las mujeres, por ejemplo, que reciben asistencia del gobierno y aquellos que están satisfechos con los servicios de salud pública tienen más probabilidades de usar servicios de salud pública. En cambio, los residentes urbanos y los ricos están entre quienes tienen menos probabilidades de usar servicios de salud pública en las Américas; como vemos, de nuevo existen servicios pobres para pobres y ricos u óptimos para ricos continuando la tendencia que venimos mostrando en este informe. Estas anomalías también deberían tener una incidencia en nuestras decisiones políticas dado que el alcance (y la calidad) del acceso a los servicios de salud fundamentales de nuestros conciudadanos y compañeros de clase debería ser un referente para medir y valorar críticamente la capacidad y cumplimiento

gubernamental de aquellos a los que elegimos. De hecho generalmente se supone que las experiencias de los ciudadanos con los servicios públicos deberían tener implicaciones políticas importantes. A través del acceso y del uso de servicios de salud pública, por ejemplo, los ciudadanos tienen una manera de evaluar la capacidad del gobierno de brindar efectivamente servicios fundamentales. Aunque a veces no nos detenemos en estos análisis, es bien cierto que los factores socioeconómicos y hasta etnográficos de nivel individual tienen relación con el acceso a y uso de servicios de salud pública, la ubicación que tiene el individuo dentro de la economía (por ejemplo, en el sector formal o informal y el alcance del empleo o la seguridad del trabajo). Al mirar la situación en nuestro continente, entra a jugar un papel importante para el análisis, el hecho de que muchas veces, con el peligro de volverse algo normal, el hecho de haber tenido que pagar sobornos para acceder a los servicios de salud, disminuyendo así la probabilidad que un individuo de la clase media baja intente siquiera acceder a ese servicio, pues las coimas son relativamente altas.

Antes de seguir se hace necesario recordar que los servicios públicos, son inherentes a la función social del Estado, que su deber más importante es el de garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio, lo que implica una visión gerencial de estos servicios, pero además, que su prestación tenga una orientación social vinculada a la protección de derechos esenciales. Desde hace dieciocho años se aprobó la Ley 142 de servicios públicos domiciliarios en nuestro país. Esa fue el punto de partida para que el capital extranjero comprara o consiguiera en concesión, y a menos precio, las empresas de servicios públicos e el país. En un artículo titulado Los servicios públicos y la reversión de las concesiones, el compañero del PDA Oscar Gutiérrez R., en diciembre de 2012 expone como se ha venido conociendo más públicamente el modo en que gobiernos sucesivos han dado manejo a las empresas de servicio, el valor y, la calidad del servicio, la continuidad en la prestación, los subsidios que recortados se entregan a los usuarios de menores ingresos y las contribuciones creadas para que los usuarios con “mayor capacidad adquisitiva” subsidien a los “más pobres”. De esa manera, en realidad, el estado se niega a poner los recursos para aligerar la carga de los más débiles económicamente. Y, también conocemos, dice, del papel jugado -o dejado de jugar- por las comisiones de regulación, la superintendencia del ramo y los comités de desarrollo y control social. Vasta es la experiencia adquirida en todos estos años.

Sin embargo, hoy por hoy, las transnacionales apoyadas por legisladores y gobernantes proclives a sus intereses, continúan quedándose con nuestros servicios en una nueva forma de colonización que es favorecida por cada mandatario, a veces, elegido con nuestros propios votos. Isagen es la muestra más reciente

- **TRABAJO DIGNO Y DECENTE**

Este es un tema que últimamente ha tomado mucho auge, dado precisamente el deterioro en cuanto al ejercicio laboral con el que una persona común y corriente se encuentra en cualquiera de las regiones. El trabajo decente está en el centro de las políticas adoptadas por la ONU y es uno de los objetivos de 2030 del Programa para el Desarrollo Sostenible, y también asumida tripartitamente por la OIT (Declaración

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobada en el 2000, apartado III) y ahora también en la agenda internacional adoptada el mes pasado por la misma Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy existe un gran déficit de trabajo decente en el mundo, ya que la mayoría de los trabajadores no lo conocen, no exigen ni reciben. Dos mil millones de personas, dos tercios de los que trabajan en el mundo, lo hacen sin contrato y sin derechos, o sufren discriminación, o reciben una remuneración muy por debajo de sus capacidades, o están sobreexpuestos a accidentes o enfermedades laborales, o carecen de protección social, o padecen todas esas deficiencias a la vez. De hecho el 80% de la población mundial no tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más del 50% carece por completo de dicha cobertura. Es decir, no tiene asegurada ningún tipo de protección en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez o maternidad. Más de doscientos millones ni siquiera tienen trabajo, de ellos 74 millones de jóvenes lo buscan y no lo encuentran. Mientras todos esos millones de jóvenes y adultos buscan un trabajo sin encontrarlo, casi otros tantos niños son explotados laboralmente en minas, campos, casas, calles y talleres, ya que 168 millones de niñas y niños se encuentran atrapados en el trabajo infantil perdiendo su vida, su salud y su futuro. Además 21 millones de personas son explotadas en condiciones de trabajo forzoso. Este retrato desolador de la situación laboral mundial muestra cuán inmensa es el déficit de trabajo decente en el planeta.

Los datos son alarmantes: En Colombia, la persistencia de tasas de desempleo superiores al 10%; la existencia de un sector informal que genera alrededor de la mitad de los empleos; la discriminación que el mercado laboral efectúa contra las mujeres, los jóvenes, las personas en situación de discapacidad, los desplazados, entre otros; el incumplimiento de los estándares laborales; el abuso de figuras como las cooperativas de trabajo asociado; las bajas tasas de sindicalización; la precariedad y laxitud de los mecanismos de negociación colectiva y la baja proporción de cotizantes en el sistema de seguridad social, revelan la complejidad de los problemas asociados al mundo del trabajo y ponen de presente la insuficiencia de las políticas y tareas que el Estado ha invertido para superarlos.

Estos fenómenos evidencian que el desempeño actual del mercado laboral en Colombia no permite un salto cualitativo en términos del desarrollo económico y social del país. En la medida en que se perpetúe este panorama desolador en materia laboral, el trabajo continuará siendo un motivo de frustración y no una fuente de realización personal de los trabajadores y trabajadoras colombianos. En este marco es donde actúa nuestra entidad con una misión claramente definida en la Ley 119 y que, por cierto, es el referente de nuestro accionar sindical planteado más allá de la visión gremial sino, como también se ha enunciado hasta la saciedad, con una naturaleza misional.

El 68 % de los más de 22 millones de colombianos que trabajan no tienen plena seguridad social; es decir, no están afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación o fondo de cesantías. Más de dos millones no tienen empleo. Casi la mitad de los trabajadores que no cuentan son seguridad social integral se encuentran bajo formas de contratación deslaboralizada, tales como OPS, cooperativas de trabajo asociado aparentemente desmontadas, fundaciones, prestación de servicios, SAS, contratos sindicales, entre muchas. El 80 % de la población económicamente activa (PEA) gana menos de dos salarios mínimos

legales vigentes; es decir, es una población trabajadora que no alcanza a comprar con su salario la canasta básica familiar. El 50 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. (Las dos orillas – agosto de 2015).

Sin demeritar el compromiso mostrado en épocas anteriores, en este aparte debo resaltar el trabajo que vienen haciendo desde hace algunos años nuestros representantes en la Comisión de Nacional de Personal y el COPASST nacional y sus homólogos en las regionales, reclamando y presionando para que las condiciones del funcionario SENA sean las más dignas posibles, acordes con su rol en cada centro y área de trabajo, actuando con argumentos y rigurosidad. Además ha permitido sustentar varias querellas, interponer tutelas y denuncias que han develado el poco interés, desorden e irresponsabilidad con las que la administración de la entidad venía tratando el tema. Reconocimiento para estos compañeros miembros de aquellas instancias.

- **APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS**

En el último siglo y medio, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Especialmente, en las tres últimas décadas, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias.

Las compañías multinacionales han pasado a controlar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista que hoy vivimos no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. (*Ecologista*, nº 77, junio de 2013).

Las enormes ganancias acumuladas por las empresas transnacionales tienen su origen en los mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la base del funcionamiento del capitalismo. La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera tanto con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda ser comprado y vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida han servido, efectivamente, para que los principales directivos y accionistas de las grandes corporaciones se conviertan en multimillonarios.

Dice David Harvey que, en *el nuevo imperialismo*, “para mantener abiertas oportunidades rentables es tan importante el acceso a *inputs* (Factores que se

utilizan en procesos productivos) más baratos como el acceso a nuevos mercados". Por eso, en los últimos años, ante la caída de los niveles de consumo, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y la rebaja de las tasas de ganancia del capital transnacional en los países centrales, las grandes corporaciones han puesto en marcha una fuerte estrategia de reducción de costes y, a la vez, han intensificado su ofensiva para lograr el acceso a nuevos negocios y nichos de mercado. Todo ello en un proceso que el propio Harvey, geógrafo británico, ha denominado de *acumulación por desposesión*: "Muchos recursos que antes eran de propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas; se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido" . En este agresivo contexto, como no podía ser de otra manera, los conflictos socioecológicos y las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado por todo el globo, con el consiguiente crecimiento de las luchas sociales frente a todos estos impactos empresariales.

Desde los años 70 hasta ahora, el capitalismo ha buscado nuevas formas para superar sus crisis de sobre-producción, sobre-valorización del capital, del crecimiento económico y de la tasa de ganancias. Algunas de estas "soluciones" fueron los planes de ajuste estructural, privatizaciones, apertura indiscriminada de los mercados, los perpetuo por procesos usureros de endeudamiento o el constante saqueo del trabajo humano y de las bases materiales, principalmente en los países del Sur, para garantizar el crecimiento y la acumulación capitalista. Es un proceso propio del neoliberalismo, conocido como "sacar sin hacer". Sin embargo, no les es suficiente. Hoy, no sólo quieren expandir esas mismas políticas; también quieren lucrar con la crisis económica, alimentaria y ecológica que han provocado, con la creación de nuevas mercancías y con las "falsas soluciones" al cambio climático.

Esto implica una mercantilización extrema de la Naturaleza, incluidos sus ciclos y funciones, que son la base misma de la vida. Así, los bosques, el agua o el aire se transforman en una mercancía. Esto va a traer un fuerte impacto sobre la biodiversidad, la tierra, la cultura y la vida, sobre todo de los pueblos originarios, campesinos y comunidades tradicionales. En sus territorios, estas poblaciones enfrentan diariamente conflictos ambientales con empresas y gobiernos para defender y garantizar otra relación con la Naturaleza como bien hemos tenido ejemplos en nuestro país con las concesiones (Léase venta) de páramos, los ríos, los bosques, la flora y la fauna, terminadas en sobrexplotación, depredación y saqueo. Estos procesos de mercantilización van acompañados de una profunda financiarización de la Naturaleza, donde todo se puede comprar o vender en cualquier bolsa de valores del mundo. Con esta nueva fase del capitalismo, con el mercado de los bonos de carbono, los Programas de Reducción de Emisiones de Carbono causados por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), los Servicios Ambientales y otros, nuestras etnias y campesinos pasan a ser objetos de desplazamiento o expropiación violenta, sus bosques se transforman en mercancía y los bienes de la Naturaleza pasan a ser "servicios ambientales". (Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 2102). Esta estrategia llamada "Economía Verde", ampliamente divulgada como la nueva estrategia industrial-tecnológica para neutralizar los efectos del cambio

climático, viene a constituir la nueva visión capitalista del mundo, cuyo objetivo principal es utilizar la biomasa terrestre como fuente productiva de materia, energía e información, con el fin último de seguir potenciando los sistemas productivos que, durante los últimos cincuenta años, han depredado y explotado los bienes naturales, y al hombre mismo, provocando el cuadro de deterioro-degradación del planeta, pero ahora oculto dentro de un esquema de desarrollo humano sustentable.

A la deuda deshonrosa generada en América Latina por los gobiernos ilegítimos desde la creación de los organismos financieros internacionales -en la década de los sesenta- se agrega ahora un nuevo mecanismo perverso: el canje de deuda externa por naturaleza. Un nuevo recurso del capital transnacional para aumentar su control sobre los países pobres. Si bien este mecanismo ha sido puesto en marcha por Estados Unidos en una decena de países, los casos de Paraguay y Colombia son bien ilustrativos del papel que juegan en estos procesos las grandes "transnacionales" de la conservación. Según información brindada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esos dos países acordaron en abril de 2004 un canje de deuda por naturaleza por unos diez millones de dólares. En ese mismo año el gobierno colombiano, que presidía Álvaro Uribe Vélez, se comprometió a utilizar los fondos en la implementación de proyectos locales de conservación, con el objetivo de proteger importantes áreas de bosques tropicales. Para llevar a cabo este canje de deuda por naturaleza, el gobierno de Estados Unidos cedió a Colombia 7 millones de dólares. Las ONG Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund contribuyeron con 1,4 millones de dólares. Las áreas de Colombia que se beneficiarían por la firma de este acuerdo son los bosques del noreste de los Andes tropicales, la región del río Orinoco en los Llanos Orientales y el Caribe, como sabemos, son zonas inmensamente ricas en fauna y flora.

Según Hildebrando Vélez, integrante de la organización ambientalista Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia, la exigencia es que en el país que recibe los fondos se establezca un administrador que los maneje, que tenga la confianza de Estados Unidos. Para entonces, en el caso colombiano el administrador es el Fondo para la Acción Ambiental, fundación sin fines de lucro constituida en el año 2000. Esa institución es la encargada de ceder los fondos para financiar proyectos de ONG colombianas, dispuestas a trabajar en la conservación de los bosques tropicales en las áreas seleccionadas. En realidad lo que se logra con los programas de canje de deuda por naturaleza es entregar a Estados Unidos y a Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, el control y el poder de decisión sobre los recursos naturales de un país.

El país deudor, que supuestamente es el "beneficiario" del canje, en realidad pierde posibilidades de decidir sobre el manejo de sus propios recursos, facultad que cede al gobierno estadounidense, a las empresas privadas asociadas a él y a las grandes transnacionales de la conservación.

Por lo general, están de por medio las regiones más ricas y abundantes en recursos de la nación deudora. Ese país no solo depende, con estos canjes, de decisiones foráneas para manejar sus recursos, sino que además queda expuesto al ingreso a

su territorio de grandes empresas privadas que se dediquen a brindar servicios ambientales, entre otros. Algunos ejemplos:

En El Salvador quedó bajo “protección” un bosque nublado único en ese país, donde proliferan orquídeas y raros ejemplares de monos araña, pumas y búhos rayados. En Belice, el canje le costó al estado la entrega de un segmento del Corredor Montañoso Marino Maya, que abarca un pedazo de costas en el Caribe.

En el caso de Perú, el acuerdo con Estados Unidos incluyó el Santuario Histórico de Machu Picchu y la denominada Reserva Natural de Pacaya-Samiria, así como bosques tropicales de la selva amazónica.

El ambientalista Hildebrando Vélez realiza una crítica de los proyectos de conservación locales que se implementan en el marco del cumplimiento de estos programas de canjes de deuda por naturaleza. Explica que esos proyectos estarían orientados a que actores particulares realicen, bajo su control directo, tareas que son responsabilidad del Estado, debilitando al mismo y transfiriendo sus funciones a actores privados. Esos emprendimientos también buscarían asegurar la conservación biológica con el propósito de tener una disponibilidad futura de recursos para proveer servicios ambientales privatizados. Los servicios ambientales (como el ecoturismo) responden a una lógica de mercantilización de la naturaleza, según la cual los recursos naturales tienen un valor económico y por tanto pueden ser vendidos. (Revista Biodiversidad | 26 abril 2012)

- **PAZ COLOMBIA**

Luego de más de 50 años de conflicto armado, Juan Manuel Santos prometió que 2015, recordemos, sería finalmente el año de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para Santos, que logró la reelección con el diálogo como bandera, se convirtió en una necesidad imperiosa sellar las negociaciones que comenzaron hace casi tres años en La Habana. A mediados del año pasado la revista The Economist incluso dejó entrever que Santos podría recibir el premio Nobel de la Paz si en 2016 se concretara el acuerdo con las FARC.

El 4 de febrero pasado, en Washington los presidentes Obama y Santos, en presencia del ex presidente Andrés Pastrana y en medio de los desaires de Uribe, se reunieron para celebrar el décimo quinto aniversario del Plan Colombia, que para la derecha colombiana estuvo plagado de éxitos, pero desde otro punto de vista más realista fue una operación militar con graves efectos colaterales. En esa misma reunión se anunció que esta estrategia de intervención norteamericana ya no se llamará “Plan Colombia” sino “Paz Colombia”, reorientada, según Obama, al postconflicto con un apoyo de su gobierno de 450 millones de dólares, los cuales solicitará al congreso del mismo. Frente a todo esto, antes de que algunos lancen gritos de júbilo, es necesario recordar algunas cifras del Plan Colombia:

Según cifras del optimismo oficialista, durante tres quinquenios Colombia recibió de Estados Unidos asistencia técnica, militar y de inteligencia por casi 10 mil millones

de dólares para erradicar el narcotráfico, fortalecer la justicia y la institucionalidad y derrotar a las guerrillas. Las fumigaciones aéreas con glifosato, el fortalecimiento de la Fuerza Aérea y la creación de la aviación militar del Ejército, así como el apoyo y la coordinación de la operaciones de inteligencia, permitieron resultados contundentes en desmantelamiento de frente guerrilleros y bajas y capturas de jefes insurgentes. A estos resultados los gobiernos de Estados Unidos y Colombia le suman el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el crecimiento económico del país en los quince años de ejecución del Plan. Coinciden los dos gobiernos que Colombia estaba a punto de convertirse en un Estado fallido y que ahora es un país viable y próspero.

No obstante hay otros indicadores que muestran resultados menos optimistas en términos de soberanía nacional, medio ambiente, derechos humanos, desplazamiento forzado, refugio, diseminación de cultivos y fragmentación de carteles de la droga. Deben considerarse las siguientes cifras:

Según la Unidad de Víctimas del gobierno nacional, en el cuatrienio 1998/2002, que coincide con el gobierno de Pastrana y con el inicio del Plan Colombia, alrededor de 1.700.000 personas fueron desplazadas de manera violenta de sus hogares. En el primer gobierno del presidente Uribe el desplazamiento afectó a 1.854.786 colombianos. La situación no mejoró en el segundo mandato de la "seguridad democrática" porque el número de personas desplazadas alcanzó la cifra de 1.457.697 compatriotas, en su mayoría campesinos pobres víctimas de grupos paramilitares, Fuerza Pública, guerrillas y fumigaciones. En ocho años del gobierno de Uribe y en plena ejecución del Plan Colombia (2002-2010) el desplazamiento forzado adquirió la dimensión de una crisis humanitaria que arrastró a 3.312.483 de personas, más de la mitad de los 6.200.000 desplazados reconocidos en Colombia desde 1985.

Pero no todas las personas perseguidas se quedaron en el territorio nacional. Según el Acnur, alrededor de 350 mil compatriotas tienen hoy la condición de refugiados o solicitantes de refugio en por lo menos 20 países del mundo y el 70% se fueron durante los últimos 15 años.

En cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca el panorama es desalentador. Cuando se inició el Plan Colombia se estimaban en 163.289 hectáreas los cultivos de coca. Ocho años después (2007), durante el gobierno de Uribe, el área cultivada era de 157.200, es decir, 6 mil hectáreas menos después del desastre ambiental que implicó fumigar alrededor de 800 mil, muchas de las cuales eran de cultivos de pancoger y, en ocasiones, de proyectos agrícolas financiados por el mismo Plan Colombia. En 2014 el área cultivada de coca era de 112 mil hectáreas, 51 mil hectáreas menos que en 1999, lejos de la meta de reducir en un 50% los cultivos ilícitos. La realidad es que 15 años después de implementar esta política de erradicación, Colombia sigue cultivando hoja de coca y produciendo y exportando cocaína a los mercados ilegales de Estados Unidos y Europa.

Pero también en el marco del Plan Colombia se acordó en 2008 con Estados Unidos el uso de siete bases militares colombianas para operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Los acuerdos permitieron que 800 militares y 600 contratistas estadounidenses hicieran presencia en el país con garantías de inmunidad. No

obstante denuncias de abusos y violaciones a 54 niñas menores de edad en inmediaciones de las bases militares en Melgar y Girardot. (www.alainet.org/es/articulo/175223). Con estos hechos, el momento nos pone ante una actitud de alerta frente a lo que he de venir, pues quien olvida la historia está condenado a repetirla y, a veces, aquel a quien se le tilda de pesimista es un en verdad un optimista bien informado.

- **HACIA UNA PAZ NEOLIBERAL?**

Otro aspecto que poco se ha ventilado, son los objetivos que en materia económica presentó Pastrana para acceder al Plan Colombia. A la continuidad y el aplauso entusiasmado de la "internacionalización de la economía", Pastrana le agregó "propósitos" concretos que se desarrollaron a lo largo del Plan. Sólo para ejemplificar, al examinar las "medidas de estabilización", aparece a la letra:

"ISA e Isagen, dos electrificadoras de orden nacional y catorce distribuidores de energía regionales de menor tamaño ya están para la venta, al igual que Carbocol. Tres bancos estatales se privatizarán el año entrante".

Anotemos que antes de viajar a la "conversión" del Plan Colombia en "Paz Colombia", Juan Manuel Santos precipita la venta de Isagen, comprometida hace 15 años e intentada también por Uribe bajo su gobierno. Igual ocurre con la Ley de ZIDRES, que no aparece en el Plan Colombia pero sí en documentos del Banco Mundial, dominado por las transnacinales: Santos preipita su aprobación, al parecer para exhibirlas ante Obama en cumplimiento de inconclusas "recomendaciones" imperiales y/o "compromisos" coloniales.

Así, como lo hemos señalado, al recibir la visita de Santos, Obama señaló que tras el Plan Colombia "las mareas han cambiado", que Colombia ya no está al borde del abismo y que ha convenido con Santos "un nuevo capítulo de la *alianza Colombia y Estados Unidos* y la vamos a llamar *Paz Colombia*".

Pero son tal vez esas dos medidas: la venta de Isagen y la expedición de la Ley de ZIDRES, la que viene explicando al país que tanto el narcotráfico como la guerra, han sido pretextos para superexplotar a país, y preguntaqndo por el sentido de esa Paz de la alianza EEUU – Colombia.

Convencidos como estamos, de la necesidad de encontrar una salida política al conflicto armado colombiano, saludamos los acuerdos entre el gobierno y las FARC y reclamamos que se negocie hoy con todas las insurgencias, para avanzar en el cese de la guerra en el país. Pero advertimos para que no se consume con ello un nuevo engaño, que venda como paz "positiva", lo que podría convertirse más bien en una paz neoliberal.

Seguramente otros informes de mis compañeros y algunos momentos de la Asamblea, ampliarán este tema con mayor profundidad.

Para terminar, ratifico la intencionalidad expresada al inicio de este informe, en el sentido de aportar para que la generación de ideas, inquietudes y propuestas nos lleven a tener claridad sobre los eventos sociales, políticos, económicos y poder

visionar horizontes posibles adecuados para la defensa de nuestro país, de nuestra soberanía, de nuestra entidad siendo congruentes con el compromiso histórico que hemos asumido cuando decidimos aceptar el reto de ser dirigentes sindicales en esta organización que muchos consideramos como parte esencial de nuestro ejercicio vital: VIVA SINDESENA!

JOSÉ F. DÍAZ PARODI
Secretario de Asuntos Políticos
Junta Nacional – SINDESENA

Santa Marta, febrero de 2016

Referencias:

- *https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015-01-19/el-1-mas-rico-tendra-mas-que-el-resto-de-la-poblacion*

- *https://jjolmos.wordpress.com/2015/03/15/el-surgimiento-del-estado-islamico-solo-causas-religiosas/*

- *http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=811%3Aen-mas-de-la-mitad-de-los-conflictos-armados-del-mundo-se-intensifico-la-violencia-durante-2014&catid=103%3Aunidad-de-analisis-2015&Itemid=74&lang=es*

- *http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Trabajo%20digno%20y%20decente*

- *file:///C:/Users/sindesena/Downloads/Informe_OIT*

- *http://omal.info/spip.php?article5916*